

Manual de operación de la república 4T:

presidencialismo, militarización, neoliberalismo y populismo

HUMBERTO MÁRQUEZ COVARRUBIAS*

El manual de operación de la «cuarta transformación» en México sigue una serie de movimientos tácticos que van reconfigurando el entramado del poder político del Estado y las relaciones con la sociedad civil. La estrategia supone hacer una reforma del Estado mediante la restauración del presidencialismo, la subordinación de los otros poderes (Legislativo, Judicial y militar) y la supeditación de organismos e instancias de la sociedad civil, como los medios de comunicación, intelectuales, iglesias, sindicatos, científicos, académicos y artistas. Asimismo, considera hacer reajustes en la estructura social: la procreación de un nuevo bloque de poder dominante, la restauración del pacto populista para afianzar las bases sociales de apoyo y la contención del bloque social opositor. La reconfiguración de la base social de apoyo es crucial tanto para los fines del control político de la población como para la articulación de una base electoral de sustentación del gobierno mediante el populismo asistencialista. Con todo, desde la perspectiva del sistema capitalista, se trata de una transformación inocua, que pretende, sin embargo, conformar una hegemonía política duradera, que en su derrotero marca líneas de continuidad con los ejes profundos del capitalismo mexicano y apuntala reformas superficiales en la órbita gubernamental.

Carta de navegación

La emergencia de la llamada «cuarta transformación» (4T), el proyecto de gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tiene su explicación inicial en la extendida crisis política del Estado mexicano derivada de la incapacidad de la clase dirigente compuesta por la burocracia política neoliberal y la burguesía exportadora para preservar su dominio sobre el conjunto de la nación. El quiebre del proyecto político neoliberal,

que sumaba tres décadas y media, había perdido el precario consenso y se encontraba profundamente desprestigiado. En el escenario deambulaban los gobernantes envueltos en corrupción y escándalos, el sistema político se hundía en una crisis de representación que impedía la formación de mayorías legislativas y los partidos políticos y sus personeros, sumidos en el desprestigio absoluto, eran incapaces de detentar el poder, ejercerlo y establecer la agenda política nacional.

*Docente investigador, Unidad Académica en Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas, México

La respuesta oportuna fue la conformación de un frente electoral multclasista sin ideología nítida o con una ideología contradictoria, compuesto por diversas expresiones de la izquierda y la derecha, nucleado por un líder carismático, en su tercera y última intentona presidencial.¹ La 4T surge en un momento de descomposición política del Estado mexicano, deslegitimado e incapaz de renovar sus cuadros dirigentes a partir de la baraja de personajes políticos de la tecnocracia y la burocracia que había comandado el país en los últimos seis sexenios. El sistema de poder necesitaba una depuración y renovación, pero el único candidato con respaldo popular era AMLO, un político tradicional emanado de las entrañas del sistema estatista orquestado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que había forjado su liderazgo en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) — en buena medida un sucedáneo del nacionalismo revolucionario priista —, luego de relevar a Cuauhtémoc Cárdenas, y reorientar la vena ideológica tardopriista hacia un confuso batidillo nacionalista, evangélico, moralista y populista.

La formación del gobierno triunfante encabezado por AMLO resultó ser un proceso desvinculado del movimiento popular que le reeditaré un enorme caudal de votos y en contraste expresó los pactos con empresarios y políticos de la «mafia del poder» que se decía combatir. El movimiento político electoral recogió las demandas sociales, las incorporó a su discurso y las utilizó para agenciar el voto popular mayoritario. El inconveniente es que una vez convertido en gobierno, la fuerza popular se disolvió, porque no tenía vida orgánica como sujeto político colectivo, sólo era una masa amorfa, un contingente movilizado para fines exclusivamente electivos. Ni siquiera se aprovechó la energía social ascendente para formar un genuino partido político, que no sólo superara los desafíos de la coyuntura electoral, sino que sistematizara las demandas sociales y las integrara como parte del contenido programático del nuevo gobierno, más

allá de los programas asistencialistas. No obstante, en una sociedad donde el neoliberalismo arrasó con los vestigios del desarrollismo y sus instituciones garantistas de derechos y la red de protección, cualquier promesa redentora que caiga en terreno yermo será bien recibida, máxime si se hace en tono mesiánico, paternalista o populista, sin mencionar que obrará en descargo de organizar un proceso amplio de transformación social. En cambio, las principales directrices económico-políticas han sido negociadas con las fracciones aliadas de la burguesía multinacional y nacional, cuyos intereses forman parte de las líneas pragmáticas de la gestión de gobierno.

El proyecto de transformación de la 4T se constriñe a una reforma del Estado sin cambio social, es decir, un transformismo sólo de la superestructura² mediante la concentración del poder en la Presidencia, con el gran soporte de las Fuerzas Armadas, el respaldo de una fracción del empresariado y el apoyo de políticos e intelectuales populistas. Aún cuando dispone de la aprobación de amplios sectores populares, en lugar de materializar esa fuerza latente por la vía de una praxis política transformadora, sólo se utiliza para mantener la popularidad del liderazgo. Es una especie de transformación inocua que realiza la tarea de control de daños, restaña el sistema de poder y apuntala el patrón de acumulación, sin modificar la estructura social ni las relaciones de subordinación con el capital global y los intereses del imperialismo. Provisionalmente, significa un transformismo vertiginoso, emocional, edulcorado.

En apariencia, dependerá de la presión de las fuerzas sociales al gobierno para que cumpla las expectativas de transformación social, pero el gobierno se vale de muchos recursos retóricos, propagandísticos y programáticos para desorganizar a la población, persuadirla de que el gobierno la representa y de que algún día cumplirá su cometido, a sabiendas de que las tácticas reformistas asumidas no se enfilan a cambios sociales sustantivos.

Una pauta de transformación social supone un proceso de largo aliento, dialéctico, de destrucción, conservación y creación de relaciones, instituciones y prácticas. No obstante, la 4T se refugia más en el plano discursivo demagógico de un presunto cambio, donde tienen cabida políticas conservadoras o restauradoras de formas políticas ya caducadas, pero añoradas.

Ante todo, la 4T es un proyecto de poder político, y las claves para entender su lógica de funcionamiento, su racionalidad política, suponen la necesidad de desmontar y comprender cómo se concentra el poder, cómo se ejerce el poder, cómo se distribuyen los espacios de poder y los recursos, y cómo se construye la base social de apoyo.

¹ Humberto Márquez Covarrubias, «Votaciones en México 2018: la trama del teatro electoral o la reproducción del sistema de poder», *Observatorio del Desarrollo. Investigación, Reflexión y Análisis*, vol. 7, núm. 20, 2018.

² Humberto Márquez Covarrubias, «El vértigo transformista. Antinomias del lopezobradorismo en México», *Observatorio del Desarrollo. Investigación, Reflexión y Análisis*, vol. 7, núm. 21, 2018.

El proyecto de gobierno

En su nombradía, la 4T es una remembranza de la mitología del nacionalismo revolucionario, la ideología del partido de Estado (PNR-PRM-PRI) y alumbró su intento por restaurar el presidencialismo. La historia patria de México se sintetiza en los grandes hitos de la Independencia, Reforma y Revolución donde se ponen de relieve las hazañas de los héroes que forjaron la nación mexicana y la república, lo cual da cauce a la larga hegemonía posrevolucionaria del régimen de partido de Estado, que cristaliza en el presidencialismo incontestado, omnipotente e idolatrado. El partido de Estado controlará a la sociedad civil y la organizará en sectores corporativizados (obrero, popular y campesino), en tanto que los poderes Legislativo y Judicial estarán subsumidos al presidente, en tanto que las Fuerzas Armadas se subordinan al mando civil y los medios de comunicación subsisten al amparo de una férrea fiscalización política. Al influjo del autoritarismo estatal se desplegó el desarrollo del capitalismo en su vertiente subdesarrollada y dependiente, que no obstante permitió un ciclo de crecimiento relativo, si bien subordinado al capitalismo estadounidense, el llamado desarrollo estabilizador basado en una economía petrolizada y una industrialización tutelada por el Estado, insuflará la fabulación del «milagro mexicano», hasta que se imprimió un golpe de timón en el seno mismo del Estado para adoptar el modelo neoliberal, luego de la crisis del colapso petrolero y la consecuente crisis de la deuda. En-

tonces los funcionarios tecnócratas, influidos por su formación monetarista, dismantelaron el esquema nacionalista y privatizaron las empresas públicas; destruyeron la institucionalidad social en la producción, distribución y consumo; signaron convenios comerciales que derrumbaron las barreras de protección mercantil y abrieron la entrada indiscriminada a la inversión extranjera y monopolizaron los sectores económicos; flexibilizaron las relaciones laborales y, en suma, impusieron un proyecto de modernización neoliberal, vigente hasta nuestros días.

Ante la gran transformación neoliberal precedente, el proyecto de transformación de la 4T representa una especie de «revolución pasiva» o una transformación inocua, que tiene tres características básicas:

Superestructural: se concentra en la esfera política y moral, es decir, no entraña un cambio estructural o sistémico sobre las relaciones sociales, las pautas de acumulación y los fundamentos del poder político.

Estatalista: se opera desde arriba, en torno al presidencialismo restaurado, y desde abajo se cultiva el consentimiento pasivo en vez de construir poder popular.

Reformista: se implementan adecuaciones para dar continuidad a los ejes de la acumulación y los engranajes del poder, con supresión de algunas instituciones y transfiguración de otras.

El proyecto de gobierno consiste en concentrar el poder para proyectar una estructura de dominación transexenal y, al menos, generacional.



Adquiere ese carácter pasivo porque es un proceso orquestado e impuesto desde arriba, desde el poder estatal fetichizado, sin considerar el verdadero protagonismo de las clases trabajadoras, los sectores subalternos, que sólo invocados como una entidad desclasada y transfigurada, como una entelequia —por ejemplo, el «pueblo bueno»—, que será el reflejo donde se mira el poder a sí mismo. El signo político puede adquirir matices progresistas, reaccionarios o una combinación de ambos, pero lo significativo es que se conduce desde arriba por la vía del estatismo redivivo. Como sea, es una transformación inocua, apuntalada por argucias demagógicas, prácticas impositivas y estructuras centralistas. La confusión ideológica que enarbola el cambio social difícilmente puede progresar si niega el conflicto de clases y el poder popular emancipador para colocar en su lugar políticas populistas aderezadas con la reivindicación de la moral conservadora fundada en la patria, la familia y la religión.

El espejismo de la transformación pasiva encubre las formas de subordinación, cooptación y control desde arriba, mecanismos políticos que articulan esta forma contrahecha de hegemonía política en ciernes, y rehúyen o postergan el factor clave de la formación política, la organización y concientización desde debajo de las clases trabajadoras. La izquierda posibilista adopta el programa de la transformación inocua, pasiva, porque considera que es lo que se puede hacer, el menor de los males, el mientras tanto. Si bien pergeña una serie de reformas que pueden tener algún carácter progresista, siempre estará imbuido dentro de la dinámica subdesarrollada de un capitalismo periférico en crisis secular, al cual no se pretende trascender ni replantear el orden económico y social, sino sólo estabilizarlo y darle un barniz «humanista». El proyecto de gobierno consiste, en términos generales, en dismantelar algunas instituciones, preservar otras y crear otras más con el propósito de dismantelar las bases de sustentación de los gobiernos anteriores, restablecer los pactos con los poderes económicos y políticos vigentes y concentrar el poder para proyectar una estructura de dominación transexenal, cuando menos de vigencia generacional.

El punto crítico es que siendo una alegoría política de la transformación la 4T carece de un genuino proyecto de transformación social.³ Ni siquiera cuenta con una política industrial, educativa, científica y cultural que sienta las bases materiales para una nueva escalada de acumulación y desarrollo. El lineamiento más propositivo está contenido en un simple portafolio de proyectos de infraestructura y comunicaciones que son el estandarte sexenal (refinería Dos Bocas, aeropuerto militar de Santa Lucía y Tren Maya), además se incluye un draconiano programa de austeridad neoliberal que mina las capacidades estatales y expropia recursos del propio erario para financiar los proyectos insignia y los programas asistencialistas, amén de que se utiliza la arenga de la lucha selectiva contra la corrupción para acometer contra los adversarios políticos del presidente. La agenda pública no está exenta de ocurrencias que desvían la atención ciudadana, como la insólita venta-rifa del avión presidencial que no ha sido vendido ni rifado; la realización de consultas a mano alzada en mítines y los desplantes demagógicos de ocasión.

Más claramente, la 4T es un audaz proyecto de poder transexenal, como lo fuera el proyecto neoliberal priista de cuño salinista, aunque paradójicamente varios eminentes funcionarios lopezobradoristas han sido los verdaderos políticos transexenales y transideológicos, puesto que antes han sido acomedidos funcionarios del neoliberalismo priista o panista y ahora lo son del morenismo lopezobradorista presuntamente antineoliberal, y todavía más se aprestan a nutrir las fuerzas políticas que habrán de tomar la estafeta en la sucesión presidencial. Indubitablemente, se trata de la proyección de un grupo de poder en un horizonte generacional cuyo manual de operación política contempla el ejercicio férreo del poder en el presente y la reproducción de los ámbitos de poder en el futuro inmediato, con la preponderancia de un partido que funge como una maquinaria electoral, que por si fuera poco cuenta con una instancia paralela de operación política que puede suplir al propio partido oficial («superdelegados» federales en los estados y programas asistencialistas), pero que cuenta como su vórtice al mando operativo de un poder presidencialista centralizado y en torno suyo el tejido de una red de alianzas multiclasis y multisectoriales que sirve a su vez como red de protección y mecanismo de reproducción del poder.

1. Restauración del vetusto presidencialismo

Con haber ganado las elecciones, AMLO no toma el poder necesariamente. La lucha apenas comienza, por lo que tiene que emprender una pertinaz lucha para verdaderamente Conquistar el poder político en los intrincados ámbitos del Estado (el «ogro filantrópico» según Paz

³ *Idem.*

o el «elefante reumático» según AMLO). Por esa razón, se emprende el desmantelamiento de determinadas instituciones, la depuración de la burocracia, el despido de personal, el acaparamiento de recursos presupuestales, la erosión de los organismos autónomos, la expropiación de fideicomisos, la cancelación de subsidios, la disminución de partidas presupuestales y la cancelación de programas. En la misma lógica, se propala un discurso antagonista en contra de personajes políticos adversarios de los partidos que han gobernado previamente y de una pléyade de intelectuales, periodistas y organizaciones que los secundaron. Es notorio que en esas escaramuzas catárticas, sobre todo en las diarias conferencias matutinas, se consume gran parte del tiempo y energía presidencial, la mayoría de las veces de manera estéril y desorientada, pero hasta cierto punto efectiva, puesto que los mensajes tienen como destinatario no a la masa social crítica sino a las bases de apoyo que resguardan el voto duro de la izquierda electoral que se acarrea desde tiempos del PRD y que ha sido encauzada hacia Morena. El punto focal de la perorata mañanera son los convencidos o simpatizantes del proyecto transformista y el imaginario pueblo bueno, es decir, el cúmulo de beneficiarios de los programas asistencialistas donde recae buena parte de los recursos previamente confiscados a los mismos aparatos del Estado, pero también los activistas políticos, intelectuales y periodistas que ahora asumen las funciones de intelectuales orgánicos —quienes sustituyen a los omnipresentes y cotidianamente denostados voceros de gobiernos anteriores—, sin olvidar a los incondicionales, oportunistas y acomodaticios que se suben al barco de los ganadores. La correlación de fuerza se está tensando, se desencajan los esquemas anteriores y se cargan los dados hacia nuevos protagonistas.

La apuesta no es en aras de una transformación social sustantiva sino en pos de la restauración del viejo presidencialismo priista, para tomar las riendas de la dirección política y reeditar el régimen capitalista de ley y orden, aderezado con valores familiares y religiosos. No se trata de otorgar «todo el poder al pueblo»,⁴ ni de consolidar un «gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo»,⁵ sino de concentrar todo el poder político en el presidente. Es decir, el cometido principal es concentrar el poder en la figura de un caudillo, un hombre fuerte, que se presenta con una aureola de moralidad y sapiencia, quien todo lo decide, y garantizar a toda costa la popularidad del presidente, celoso de su «investidura» y de «fijar la agenda pública», de conversación. Dicha estrategia política comunicacional es efectiva para encubrir los grandes problemas estructurales, atacar a los adversarios y colocar temas banales en la discusión cotidiana que, cual megáfono, repiten incesantemente los medios de comunicación, sean adeptos o críticos.

⁴ Menos aún al «pueblo trabajador».

⁵ Abraham Lincoln, discurso de Gettysburg, 19 de noviembre de 1863.

Con ese cometido, se precisa desmontar los mecanismos de control y operación del régimen político que operaba mediante formas de gobierno delegado, la división de poderes y la cooptación de los medios de comunicación. No para disolverlo y crear una nueva institucionalidad, sino para concentrar el poder en el poder presidencial que en buena medida se había disgregado con la multiplicación de instancias intermedias o autónomas que realizaban funciones de regulación o gobernanza. En esa lid se busca destronar las instancias de mediación política, desmantelar las bases de apoyo de los gobiernos anteriores y reorientarlas hacia el nuevo gobierno para concentrar el poder, construir una nueva hegemonía, articular un nuevo bloque social de poder, poner en una misma sintonía a los poderes del Estado (es decir, supeditar al Parlamento y a la Corte), garantizar la lealtad de las Fuerzas Armadas, doblegar a los medios de comunicación y voces críticas, anular a la disidencia y a los movimientos sociales e incrustar a las Iglesias cristianas en los pasillos de la república supuestamente juarista.

El cometido de la 4T es superar el periodo neoliberal, que en México habría durado más de tres décadas y media y su operación política se atribuye a los gobiernos del PRI y del Partido Acción Nacional (PAN), aunque también fuera copartícipe el PRD (hoy Morena), como parte de la marea de la «transición a la democracia». Para efectos prácticos, el neoliberalismo representó la última gran transformación de la economía, la sociedad, la política y la cultura mexicanas.⁶ En la peculiar reinterpretación de la historia nacional de los escribas de la 4T, el neoliberalismo sería una suerte de hoyo negro, en tanto que el proyecto de gobierno supone una regeneración de los cimientos políticos e ideológicos del nacionalismo revolucionario, aun cuando objetivamente se preservan los ejes económico-políticos de la acumulación capitalista y su conducción macroeconómica neoliberal, que exige altas dosis de pragmatismo y ortodoxia gubernamental.

⁶ Humberto Márquez Covarrubias, «Distopía neoliberal en México. Trama sociopolítica del poder y resistencia social», *Observatorio del Desarrollo. Investigación, Reflexión y Análisis*, vol. 7, núm. 20, 2018.

2. El militarismo como soporte presidencialista

Un papel central en el proyecto político de la 4T ha sido conferido a las Fuerzas Armadas. Según la óptica liberal, el Estado moderno está basado en el ejercicio de la violencia mediante las Fuerzas Armadas, la policía y la cárcel, sin mencionar las medidas extrajudiciales. Si bien es demagógico decir que el «Ejército es el pueblo uniformado», como insiste AMLO, desde la lógica del discurso oficial significa una concreción del pueblo imaginario como parte activa y determinante del régimen político,⁷ por lo que, en definitiva, el gran puntal de la 4T, más que el «pueblo bueno y sabio», que es un ejército de votantes que se moviliza ocasionalmente, son las Fuerzas Armadas, a quienes se les han concedido todos los privilegios legales, presupuestales, materiales y propagandísticos. El principal cometido es allegarse el respaldo de los estamentos militares para evitar un posible golpe de Estado —que a más de ser sugerido por un alto mando militar, es invocado por el propio gobierno y sus ideólogos mediante la divulgación de la teoría del «golpe blando»— y para controlar la violencia, contener a la disidencia y realizar funciones ominosas, como repeler a las caravanas de migrantes centroamericanos y caribeños por requerimiento del gobierno de Estados Unidos. Para ello, el gobierno ha otorgado el mayor de los apoyos a las Fuerzas Armadas: aumentó el presupuesto frente a un recorte generalizado en todos los órdenes de la administración pública y los programas de desarrollo social no asistencialistas; modificó el marco legal para dar cobertura al despliegue militar en la vida civil; le confirió funciones de policía mediante la creación de la Guardia Nacional; le concedió funciones de empresario constructor y administrador de los proyectos insignia en el aeropuerto militar internacional de Santa Lucía, tramos del Tren Maya y proyectos de desarrollo inmobiliario; le asignó el control y

⁷ Redacción, ««Vengo a pedirles su apoyo para combatir la inseguridad», dice AMLO a las Fuerzas Armadas», *Proceso*, 25 de noviembre de 2018, en <https://www.proceso.com.mx/561091/vengo-a-pedirles-su-apoyo-para-combatir-la-inseguridad-dice-amlo-a-las-fuerzas-armadas>

administración de los puertos y aduanas, entre otras medidas que colocan al sector castrense como uno de los sectores más privilegiados de la 4T. Ante ese panorama, no es exagerado argüir que el régimen de la 4T puede ser conceptualizado como militarista. El militarismo significa una excesiva intervención de los militares en la vida política,⁸ pero su injerencia también se expande al terreno económico y, en tal sentido, se puede asumir que se configura una forma de cogobierno entre la burocracia política y las Fuerzas Armadas, sin que sea un régimen militar.

En México, las Fuerzas Armadas, como en todos los Estados capitalistas, son las fuerzas represivas del régimen. Bajo la doctrina de seguridad en boga se le confieren atribuciones máximas al sector militar y naval, como defensoras de la soberanía nacional en caso de guerra o intervención extranjera, de la seguridad interna frente a grupos armados que disputan el control territorial; pero también ejercen funciones de disuasión, control o represión ante opositores, disidentes o grupos armados con proclamas políticas. No obstante la habitual percepción pública favorable, han estado involucradas en hechos de sangre como los de Acteal y Ayotzinapa, o antes en octubre del 68 y un largo etcétera; también han estado inmiscuidas en asociación delictuosa, particularmente en el negocio de las drogas (mariguana, heroína, anfetaminas y cocaína), en connivencia con los traficantes de drogas (los llamados «cárteles» de Sinaloa, el Golfo, Zetas, Jalisco Nueva Generación, entre otros). En esa trama, la captura en Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, acusado por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de tráfico de heroína, cocaína, anfetaminas y mariguana, además de lavado de dinero del narcotráfico, es la punta del iceberg de la participación de las fuerzas castrenses en diversos hechos delictivos.⁹

Por acuerdo presidencial, las Fuerzas Armadas han sido facultadas para realizar tareas de detención de personas, ejecución de órdenes de aprehensión, aseguramiento de bienes, resguardo y procesamiento de escenas del crimen y despliegue de labores de seguridad pública en las aduanas, carreteras federales, aeropuertos, parques nacionales y medios de transporte en general, sin que ello amerite controles externos ni rendición de cuentas. En esa inteligencia, las Fuerzas Armadas no se subordinan a la autoridad civil sino que sólo se «coordinan», cuando en la práctica suele suceder lo contrario.¹⁰

⁸ Gianfranco Pasquino, «Militarismo», en Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino (eds.), *Diccionario de política*, México, Siglo XXI, 2007.

⁹ Mathieu Tourliere, «La DEA acusó a Cienfuegos de narcotráfico y lavado de dinero. Estos son los cargos que se le imputan», *Proceso*, 16 de octubre de 2020, en <https://www.proceso.com.mx/653475/la-dea-acuso-a-cienfuegos-de-narcotrafico-y-lavado-estos-son-los-cargos-que-se-le-imputan>

¹⁰ Secretaría de Gobernación, «ACUERDO por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria», *Diario Oficial de la*

Con todo, estas condiciones preferenciales normalizan lo que se hizo desde el gobierno de Felipe Calderón, esto es, la militarización de la seguridad pública sin control y más allá del ordenamiento constitucional. Así, por ejemplo, la novel Guardia Nacional es un disfraz de las Fuerzas Armadas como cuerpo civil. Pero mientras se consolida ese agrupamiento, se asienta constitucionalmente, y de manera ambigua, que «el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria», es decir, en tareas que supuestamente ya realiza la Guardia Nacional, además de que no será de carácter excepcional, pues su vigencia se extiende hasta 2024, cuando termina el primer mandato de la 4T.

La expansión de la militarización se apoya en el populismo punitivo que proviene de los gobiernos anteriores, y se refuerza con la ampliación de las tareas militares en el control territorial, social y político; la creación de la Guardia Nacional como una policía militar, y los cambios en los códigos penal y civil que incluyen los juicios orales, la ampliación del catálogo de delitos, la prisión preventiva oficiosa, entre otros ordenamientos.

El empoderamiento de las Fuerzas Armadas se consolida con la cesión del control de espacios estratégicos para la vida civil y económica, como aeropuertos, aduanas y puertos; el brindar un protagonismo en labores de distribución de bienes y servicios de programas sociales; la concesión de obras civiles de infraestructura y planes de negocio empresariales; el manejo de fideicomisos cuando la mayor parte han sido extinguidos; la garantía de un esquema abierto para las adjudicaciones directas y la expansión del presupuesto asignado. El presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), entre 2000 y 2020, ha tenido un incremento desproporcionado de casi 500 por ciento y para 2021 se considera un aumento de 20 por ciento en un contexto de férrea «austeridad».

La cooptación de las Fuerzas Armadas por la 4T se basa en que aquellas se asumen como un órgano del Estado que responde al mando supremo del presidente en turno, por lo que soportan los cambios político-partidistas de las sucesiones presidenciales; pero esto podría ser insuficiente, y para afianzar el apego institucional se recurre al aumento sustancial del presupuesto al sector castrense, en un contexto donde todos los aparatos del Estado fueron castigados con recortes draconianos; a la configuración de un marco legal favorable para el despliegue de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior y seguridad pública; a la asignación del control de los puntos de arribo fronterizo, aéreo y costero; a la creación de la Guardia Nacional (tropas del Ejército uniformadas como policías civiles); al incremento de salarios y prestaciones al personal militar; a la

concesión de negocios al Ejército (construcción de aeropuerto internacional de Santa Lucía que será militar, proyectos inmobiliarios, participación en megaproyectos); a la exoneración o encubrimiento de casos de presunta corrupción y violación de derechos humanos por el Ejército. Además de un recubrimiento por el discurso populista donde se dice que «el Ejército es el pueblo uniformado», pasando por alto los hechos de sangre, represión y tortura en contra de la población y comunidades específicas.

No obstante, el aparato militar que opera en México no sólo atiende a intereses nacionales. En el país están asentadas al menos 12 agencias estadounidenses en funciones de inteligencia civil y militar para rastrear información sobre narcotráfico, delincuentes prófugos, terrorismo y armas; además monitorean la migración de personas, los flujos de capitales e inversiones con dinero dudoso y realizan la búsqueda de personas e información acorde a sus intereses en materia de defensa regional y hemisférica. En estas pesquisas destacan la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA). La colaboración entre las agencias estadounidenses y mexicanas es permanente. Por ejemplo, la CIA opera a través de la Fiscalía General de la República (FGR), bajo supuestos tratados de cooperación y asistencia jurídica. Por si fuera poco, se ha incrementado la intromisión militar y de inteligencia de Estados Unidos en México. Las operaciones de la DEA ya no se realizan mediante los aparatos de seguridad pública sino que ahora se despliegan a través de las Fuerzas Armadas mexicanas y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la cual puede cancelar cuentas bancarias de determinados líderes criminales con el soporte de información compartida. Las capturas de cabecillas criminales han sido orquestadas por operaciones conjuntas encubiertas, aún cuando puedan llegar a ser fallidas, como la de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, cuya errática operación salió a la luz pública y dejó entrever tensiones entre las partes.¹¹

Federación, 11 de mayo de 2020, en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593105&fecha=11/05/2020

¹¹ Jorge Medellín, «Una docena de agencias de seguridad e inteligencia de EU opera en México», *Eme Equis*, 12 de noviembre

3. *El fantasma del neoliberalismo deambula por el Palacio*

Las líneas de continuidad con los gobiernos neoliberales anteriores son más que evidentes y ello subraya el carácter de «revolución sin revolución» de la 4T. En primer término, se establecen pactos políticos con los «políticos del pasado» que nutren las filas del partido Morena, el gabinete y la burocracia; asimismo, se tejen negociaciones con la «mafia del poder», el grupo selecto de empresarios que ha medrado del Estado en los últimos sexenios y que se replegó convenientemente al nuevo gobierno como inversionistas privilegiados, cuyo interlocutor gubernamental es el estratega empresario y jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, además de artífice del Consejo Asesor Empresarial, sin contar que varios secretarios de Estado son representantes directos del empresariado otrora denostado, y que las obras insignia del gobierno cuentan con la presencia estelar de los magnates.

de 2019, en <https://www.m-x.com.mx/al-dia/una-docena-de-agencias-de-seguridad-e-inteligencia-de-eu-opera-en-mexico>

La continuidad neoliberal se desplaza por la amplia avenida legislativa, programática y política, de tal suerte que más que descarrilarse se aceitan los ejes del proyecto de modernización neoliberal vigente desde los 1980: privatización, desregulación, apertura, flexibilización. También siguen vigentes, en lo sustancial, las reformas «estructurales» plasmadas en la Constitución y los acuerdos comerciales, incluyendo las del «Pacto por México», donde varios políticos afiliados a la 4T fueron convencidos signatarios. Aunque quizá el eje articulador más notorio del continuismo neoliberal sea el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), renombrado como Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). A ese marco se suman nuevos ajustes legislativos y programáticos, como el combate a la corrupción, el asistencialismo y la austeridad, medidas que no son ajenas a la ortodoxia neoliberal.

En el ámbito de la gestión de la acumulación capitalista se registra una disputa por el territorio y sus recursos, donde el gobierno parece inclinarse por favorecer los intereses empresariales, del grupo que le es afín.¹² La proposición es la ampliación de

¹² Humberto Márquez Covarrubias, «Pautas de la subordinación de México al capital global», en Darcy Tetreault y Mónica Chávez

El sello distintivo de la 4T es el populismo, que en la trama de la historia mexicana sería el segundo intento de cristalizar el pacto populista como guía sociopolítica del gobierno.



los espacios de valorización para el gran capital, con la reconversión del territorio en reserva estratégica y espacio sujeto al extractivismo energético, minero, eólico e hídrico en manos de redes globales de capital rentista. El hallazgo de reservas de litio, insumo para la fabricación de componentes electrónicos y tecnológicos, es una novedad que se suma a la expansión de las fronteras extractivas y que presagia tensiones legislativas. Los espacios geoestratégicos se articulan según los requerimientos estipulados en los diseños de ingeniería económica para formar grandes corredores industriales vinculados a los flujos de suministro y de exportación. Los espacios del comercio interno son copados por las grandes corporaciones monopolistas, grandes importadoras de mercaderías baratas y renuentes a rearticular los sectores productivos locales y los canales de distribución internos.

Los agronegocios de exportación siguen penetrando, destruyendo y finiquitando los reductos de la economía social campesina, toda vez que los gobiernos neoliberales desmantelaron la institucionalidad que la soportaba, propiciaron el despojo de tierras, incentivaron la migración forzada y otorgaron apoyos preferenciales a los agroexportadores de productos no tradicionales y bebidas, incluyendo, a trasmano, la exportación de enervantes. México se ha reconvertido en un campo exportador apuntalado por empresas multinacionales que se han apropiado de sectores sumamente rentables, como la industria cervecera y tequilera o productos comerciales como el aguacate y los frutos rojos.

Proyectos geoestratégicos para el capital multinacional de infraestructura, transportes, industria y comercio forman parte de la cartera de megaproyectos insignia del gobierno, que promueve la reconversión territorial de zonas de reserva en espacios de valorización de fuentes energéticas, minerales y forestales. En tanto, se mantiene la red de la financiarización, bancarización y capital ficticio que funge como el mando operativo o sistema nervioso de las grandes corporaciones. El problema ancestral de la deuda del Estado, aunado al explosivo endeudamiento de las empresas, trabajadores y sus familias, persiste como mecanismo de poder del capital a interés sobre el conjunto de la comunidad política y la sociedad civil.

El problema de la división territorial del trabajo y la bifurcación del mercado interno y el mercado externo se perpetúa. La transformación del país no puede realizarse concentrando la inversión y la atención en una sola región, sea ésta o no la más atrasada, como puede ser ahora el sur-sureste mexicano, a semejanza del criterio selectivo de la querencia regional de los presidentes anteriores, sino que parte de considerar que, hoy por hoy, todo el territorio está subsumido por relaciones de producción y distribución de alcance mundial, donde las determinaciones de la división internacional del

(coords.), *Rostros del desarrollo neoliberal en México*, México, Miguel Ángel Porrúa/Universidad Autónoma de Zacatecas, 2020.

trabajo y las exigencias del mercado mundial en general se imponen como determinación objetiva. Es demasiado provinciano y anacrónico concentrar los esfuerzos de un proyecto pretendidamente transformado en una sola demarcación regional y en un par de proyectos: Tren Maya y refinería Dos Bocas, sea por caso.

El sector laboral ha sido colocado a la cola de los acuerdos y megaproyectos. El exiguo aumento a los salarios mínimos y las reforma en materia sindical para la «democratización» los sindicatos, fueron una exigencia de los negociadores estadounidenses del T-MEC, para atenuar el dumping social laboral mexicano. De la misma manera, la reforma parcial e insuficiente del sistema de pensiones fue diseñada por el sector empresarial mexicano, a través del Consejo Coordinador Empresarial y la aquiescencia de los consabidos líderes sindicales propatronales.

4. *Populismo, aires de un nuevo paternalismo*

El sello distintivo de la 4T es el populismo, que en la trama de la historia mexicana, sería el tercer intento de cristalizar el pacto populista como guía sociopolítica del gobierno.

En apariencia el movimiento sociopolítico que tomó la presidencia de la República ha progresado y madurado, porque amén de que fue muy votado, aún mantiene un alto margen de popularidad, cuando en realidad pudiera más bien estar retrocediendo en el reloj de la historia, si acaso su cometido fuera la transformación social sustantiva. En apariencia el marco capitalista —que se confunde con el neoliberalismo, y este a su vez se reduce simplemente a la corrupción de los políticos— pareciera estarse destruyendo, pero en realidad se está depurando el sistema de poder y consolidando la trama capitalista, aún bajo la pauta subdesarrollada y dependiente. En apariencia se está concientizando a la sociedad en términos de un cambio verdadero, que debería de ser radical para serlo —poscapitalista—, cuando en realidad se corrobora que ocurre una disolución ideológica y se carece de un proyecto de transformación social, el cual no puede ser suplantado por arengas moralistas reiteradas y acciones recurrentes obsesionadas en «fijar la agenda».

El problema de la disolución ideológica resulta de la ausencia de un fundamento teórico e histórico para la tal transformación social sustantiva, más allá del discurso nacionalista decimonónico que siempre está viendo al pasado idílico en busca de efemérides, anécdotas y supuestos hechos heroicos, pero fuera de esa liturgia laica, aderezada con sermones evangélicos y moralistas, el gobierno ecléctico no se atreve ni siquiera a adoptar formas políticas reformistas en una escala progresista, ya no digamos socialistas, sino que se queda en el plano reducido del populismo, y el neoliberalismo embozado, con el cual se tiene una relación de amor-odio. El populismo toma su base social de apoyo de las capas más empobrecidas y conservadoras, afectas al paternalismo estatal y a la religiosidad popular, no de la clase trabajadora en cuanto tal, mucho menos de los sectores de trabajadores más avanzados en términos políticos, científicos y culturales. En esa tónica, la formación política que dice impulsar el cambio social termina siendo una proposición conservadora o reaccionaria, basada no en la creación de las condiciones materiales y sociales para la transformación sino en un cúmulo de sentimientos y pasiones, de formas ideológicas y culturales apegadas a sectores pauperizados, inclusive lumpenizados, ciertamente excluidos, despojados y victimizados, pero que en definitiva no están formados políticamente como clase o fracción de clase organizada, concientizada y movilizada, ni tampoco están interesados en afrontar los desafíos del cambio social y lo que esa compleja tarea entraña.

Con todo, el asistencialismo estatal, así sea neoliberal, socialdemócrata, populista o cristiano, no puede representar el factor clave para darle estabilidad política a un gobierno que pretende realizar una transformación social, menos aún cuando se trata de una sociedad en crisis profunda. Las capas sociales clientelares son volátiles y no tienen apegos políticos perdurables. Este es el talón de Aquiles de la 4T.

Gobierno que mira hacia el pasado

En la sociedad capitalista moderna el gobierno se configura, como advertían Marx y Engels en el *Manifiesto del Partido Comunista*, en el comité de administración de los negocios de la clase dominante.

En la era contemporánea, donde campea el capital global, la forma de gobierno integra distintos intereses coaligados de las élites corporativas, militares, políticas e ideológicas (que incluye las clericales). Es una ilusión suponer que existe la democracia sin adjetivos, en ningún país existe en plenitud, sólo hay simulacros o aproximaciones. El Estado y el gobierno son instancias mayormente al servicio de las clases dirigentes. El Estado campea como una macroinstitución, un mecanismo que se vale de la burocracia y las Fuerzas Armadas para hacer valer la ley y el orden capitalistas. El Gobierno funge como el sistema operativo de la coalición dominante que detenta el poder Ejecutivo y controla el sistema de partidos.

De manera concreta, en la formación de gobierno de la 4T se orquestó una alianza entre la pequeña burguesía política (sobre todo políticos profesionales de Morena y tráfugas del PRD, PAN, PRI, PT y PVEM) y una fracción de la burguesía nacional (rentista y contratista).

Metafóricamente, el Gobierno lopezobradorista muestra un busto bicéfalo, como Jano, el dios de las dos caras, uno viendo hacia el pasado y otro hacia el futuro. AMLO siempre está viendo hacia el pasado, pero no se interpela con igual denuedo a Zedillo y a Peña Nieto, pues se presume que hay acuerdos, inclusive un «pacto de impunidad» con el último, pero la mirada hacia el futuro es miope, sólo se atisban los procesos electorales inmediatos, los acuerdos políticos coyunturales y la trama de la pequeña política; hacia el horizonte de largo plazo no hay quien mire, salvo quienes sueñan en la sucesión presidencial. No hay una visión estratégica, una operación política para la transformación. Los operadores políticos en las Cámaras y en el Gobierno trabajan bajo el vértigo del día a día, procesan los dictados presidenciales, apagan fuegos, pero nada más.

La formación de Gobierno carece de signo ideológico, mezcla la derecha con la izquierda y actúa de manera pragmática. La concentración del poder político en la Presidencia no es una expresión del centralismo democrático, como diría Lenin,¹³ donde las clases trabajadoras — a las cuales no se reconoce como tales en la 4T — en alianza con los campesinos y los dirigentes políticos asumen el poder del Estado y ejercen el poder para proyectar la revolución. Aquí más bien se trata de un centralismo burocrático, donde cobra centralidad el presidente, quien subsume bajo sus designios a los diputados y senadores, a los magistrados de la Corte y a los organismos autónomos.

Depuración de la burocracia y las formas de gobierno

El desmantelamiento de los organismos autónomos, en tanto formas de gobierno indirecto, y la expropiación de los fideicomisos obra en el sentido de suprimir las instancias de mediación política

¹³ Vladimir Lenin, *El Estado y la revolución*, Madrid, Alianza, 2006.

entre el Estado y la sociedad civil, para asumir desde el Ejecutivo esa interlocución directa con los beneficiarios de los programas oficiales, asimismo para acumular más recursos del erario para los proyectos insignia. En ese mismo tenor, se aminoran o disuelven las estructuras burocráticas, los recursos y los programas de fomento de actividades clave para la vida nacional, como la investigación, la ciencia y la tecnología; la cultura, las artes y el deporte; la educación, la salud y los derechos humanos, entre otros.

La depuración y control de la burocracia se ejecuta con la aplicación de un amplio catálogo de ajustes: despido de personal, recortes presupuestales (75 por ciento), subejercicio en el gasto, desaparición de áreas administrativas y programas, disminución de bienes públicos y caída en la inversión pública multiregional. Al ajuste corresponde una concentración de recursos y su canalización hacia los proyectos preferenciales (en materia de energía, tren turístico y asistencialismo).

La división de poderes, propia de la democracia liberal, entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se disuelve por la vía de los hechos para reconcentrar los poderes, atribuciones y recursos en el Ejecutivo, lo que en la trama política mexicana significa la restauración del presidencialismo y la omnipotencia del presidente que dicta desde el Palacio Nacional los proyectos legislativos, los presupuestos y las embestidas judiciales. En el arranque, el saldo es deficitario para la democracia republicana.

Parlamento: oficialía de partes

En el Parlamento sólo se discute y se legisla. Pero en la 4T el Congreso se reduce a una oficialía de partes, donde se tramitan y aprueban las determinaciones de la presidencia, sin debate real y sin «cambiar una coma» a las iniciativas palaciegas, como en los viejos tiempos priistas. Merced a la austeridad, se suprimieron los centros de investigación que elaboraban diagnósticos y estudios legislativos. Los que mandan son los jefes políticos, que ocupan la coordinación de las bancadas y de las comisiones legislativas importantes.

En el trabajo legislativo Morena detenta la mayoría en las dos Cámaras y esta feliz circunstancia posibilita la subordinación del poder Legislativo a las determinaciones presidenciales. Pero mientras la mayoría en el Senado era producto del voto popular, en la Cámara de Diputados ese dominio mayoritario fue construido artificialmente, gracias a las maniobras políticas del tráfico de diputados entre partidos para engrosar las filas de la bancada de Morena y a la conformación de la alianza parlamentaria con los partidos de derecha —Partido Encuentro Social (PES) y PVEM— y de centro-izquierda —Partido del Trabajo (PT). Si antes campeaba el partido del orden y el dinero (la coalición neoliberal o el «Pacto por México» integrado

por el PRI, PAN, PRD y PVEM), ahora se enseñoorea el partido de la reforma y la moral (neoliberalismo+populismo+cristianismo), pero no el partido de la transformación y menos el de la revolución, donde el protagonismo fuera el de las clases subalternas organizadas políticamente.

La tremenda Corte para un gobierno plebiscitario

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) terminó siendo doblegada y encarrilada al presidencialismo. La sustitución de un magistrado y la renovación de otros permitió formar un bloque filopresidencialista entre los magistrados, que se consolidó con las presiones políticas de la Presidencia en momentos clave, como sucedió con la consulta sobre la constitucionalidad de una pregunta propuesta por el Ejecutivo para preguntar a la población sobre un posible juicio a los expresidentes, una iniciativa que tenía visos jurídicos de inconstitucionalidad, porque pretende someter a consulta pública la aplicación de la ley, como significa el hecho de juzgarlos por supuestos actos criminales. Sin desechar el procedimiento, la Corte aprobó la consulta presidencial, pero cambió la pregunta, con una redacción confusa, ambigua, ininteligible, que entorpeció más aún los caminos aciagos de la justicia.

Algo similar sucede en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que por su parte aprobó nuevos partidos a los aliados en turno de la Presidencia: Redes Sociales Progresistas (RSP) de Elba Esther Gordillo, Fuerza por México (FXM) de Pedro Haces, Partido Encuentro Social (PES) de Erick Flores, partidos que proceden de sectores corporativos sindicales e Iglesias evangélicas; en contraste, negó el registro a México Libre de Felipe Calderón, acérrimo enemigo político de AMLO.

El sometimiento de la Corte y los tribunales por la vía de la renovación de magistrados, la presión política mediática para orientar las decisiones legales hacia los designios oficiosos es un capítulo más del renacimiento del presidencialismo. En tanto que el doblegamiento de los poderes Legislativo y Judicial abre la puerta para implementar cambios constitucionales y legales que favorecen la

reconcentración del poder estatal y orientaciones legales de cuidado, como el populismo punitivo.

La nueva intelectualidad y la opinión pública

Los gobiernos han ejercido el control de los medios de comunicación a través de los gastos de publicidad, y en este caso no ha sido la excepción. Cuando los dineros públicos se recortan, las empresas se ven obligadas a hacer ajustes en las plantillas laborales de los medios de comunicación. Otra vía de presión ha sido entablar una polémica abierta con medios críticos al gobierno, los cuales sólo podrán continuar con su labor de crítica al poder si pertenecen a grupos empresariales que los sustenten. La llamada libertad de expresión siempre ha sido un coto de las empresas de la comunicación y del gobierno, que deciden las líneas editoriales, determinan quiénes pueden escribir en esos espacios y eligen los temas de la agenda pública. El gobierno tiene el poder de cooptación de medios de comunicación convencionales y digitales a través del ejercicio del gasto en publicidad oficial, como también el de hacer desaparecer a los medios independientes e insolventes con la cancelación de ese gasto. Evidentemente, no hay, ni ha habido, una política equitativa en materia comunicacional. Menos aún cuando desde la Presidencia se usa un espacio privilegiado como pocos, las conferencias matutinas, para enlazar a los medios e imponer la agenda pública de discusión, donde se tocan los temas que conviene y se suprimen los asuntos incómodos.

En ese tenor, hay un recambio entre el personal de la intelectualidad orgánica que habla por el poder y a través de él. Periodistas, artistas, comentaristas, analistas, académicos y polemistas, que antes estaban adscritos al poder comandado por el panismo y el priismo son desplazados de la escena pública, y su lugar lo toman quienes eran críticos de aquellos y están vinculados al lopezobradorismo, en tanto que los críticos genuinamente independientes siguen siendo críticos. Los intelectuales damnificados por el nuevo gobierno se arremolinan, toman posiciones en determinados medios electrónicos e impresos y entablan una polémica abierta contra los decires oficiosos, y viceversa.

Medios e intelectuales que antes recibían grandes apoyos del erario dejan de percibirlo, y los apoyos del nuevo gobierno se canalizan de manera preferente a los círculos de aliados y apoyadores, algunos de los cuales siempre lo han sido de los gobiernos en turno, como el caso de las grandes televisoras privadas.

Pensamiento mágico religioso

La religiosidad lopezobradorista contraviene la laicidad del Estado moderno y se instala en un espacio premoderno, conservador, reaccionario. No deja de ser un signo retardatario la reinscripción de la religión en la vida pública a través de la intromisión de los evangelistas, del partido político ultraderechista (PES), de la tentativa de otorgar medios de comunicación a esos grupos y, sobre todo, la arenga política del presidente basado en pasajes bíblicos y discursos moralistas a la manera de un sermón dominical. Por si fuera poco, el mandatario destila su conservadurismo en diversos asuntos de interés público, como el no apoyo a los derechos reproductivos de las mujeres (aborto legal, seguro y gratuito), a las reivindicaciones de los grupos feministas contra la violencia de género y el feminicidio. La constante alusión a los valores cristianos, a la familia y al culto religioso, junto a la recurrencia de los ritos chamánicos, santeros y católicos en los que participa, da cuenta de un presidente subsumido en el pensamiento mágico. Por lo demás, el conservadurismo político religioso no aboga por el cambio social, ni siquiera por ampliar los derechos sociales y laborales, y es condescendiente con los intereses corporativos del gran capital y renuente a políticas impositivas progresistas que tasan más al gran capital para efectos redistributivos.

El presidente suele atacar a los científicos, académicos e intelectuales, a quienes incluye en el club de sus adversarios políticos y los tilda de conservadores, corruptos y privilegiados. Son recurrentes las menciones de que «no tiene mucha ciencia gobernar», «perforar un pozo petrolero no tiene mucha ciencia», que los científicos hacen «turismo académico», quienes estudian un posgrado en el extranjero «aprenden a robar» y la sugerencia de sustituir agroquímicos por el uso del machete, entre otros decires semejantes. Es un gran error político este posicionamiento, porque el sector académico, científico e intelectual es muy heterogéneo, donde se expresan distintas posiciones ideológicas y políticas, pero no cabe duda de que es uno de los sectores de trabajadores más avanzados, informados y creativos.

Moralina con baños de pureza

El pensamiento mágico-religioso y la añoranza decimonónica nublan y distorsionan la comprensión de la realidad y la necesidad de cambio. De la mano de la religiosidad y el pensamiento mágico se

encuentra el moralismo, es decir, la crítica conservadora de la sociedad, donde antes que problemas económicos y sociales se exaltan los pruritos morales. Con depurar la corrupción individual, adoptar un credo evangélico y asumir un comportamiento honesto, los problemas se resolverán por añadidura.

La república amorosa de la 4T sería el tercer intento presidencial de la moralización política en México. El primero fueron las juntas de renovación moral en tiempos de Adolfo Ruiz Cortines, el segundo la campaña de renovación moral de Miguel de la Madrid y el tercero con la moralización de AMLO que incluye la difusión de la *Cartilla moral* de Alfonso Reyes —un librito que ya había distribuido el PRI en varias ocasiones—, la proposición de una república amorosa y los constantes mensajes cristianos, humanistas y el apelo a los valores familiares.

El no-partido o el nuevo partido de Estado

En la moderna sociedad capitalista, los partidos políticos son instancias de mediación entre la sociedad civil (clases sociales, masas, grupos étnicos, géneros, etnias) y las instancias del gobierno y el resto de los aparatos del Estado. Mediación política por donde fluyen la información, los recursos y el poder. Estas correas de transmisión son necesarias para que se establezcan determinados equilibrios y se garantice el funcionamiento del sistema político. Pero para el proyecto de la 4T hasta su propio partido, Morena, parece estorbar.

Morena puede ser concebido como un partido de gobierno, en vías de convertirse en un partido de Estado, pero dado el inaudito grado de descomposición prematura de Morena, aparece más bien como una especie de no-partido político. Dado que dispone de recursos multimillonarios y que funge como una poderosa máquina de colocación, el partido y sus entrañas es disputado como si fuera un botín político por las corrientes, denominadas «tribus», que más que ideas y proyectos, refrendan intereses y ambiciones. Es un Frankenstein político, un rompecabezas, una criatura inanimada que sin embargo adquiere poder y presencia: en 17 estados de la República no tiene dirigencias y en cinco más no tiene comité ni consejo,¹⁴ porque no los necesita, ya que todo se mueve desde la Presidencia, la verdadera estructura de operación política está en manos de los llamados «superdelegados», la figura creada y dependiente de AMLO que desplazó a las delegaciones federales y sus estructuras burocráticas en los estados para unificarlas en una sola persona que rinde cuentas directas a Palacio. A este tinglado se suman los 17 mil promotores denominados «siervos de la nación» o «servidores de la nación», cuando son agentes del gobierno y el partido, es decir,

una estructura territorial metapartidaria que opera programas gubernamentales y promueve el voto simultáneamente. AMLO funciona como fue formado, como político priista, el jefe máximo que decide y niega candidaturas, promueve y defenestra políticos, alecciona y censura. A decir verdad, no necesita partido, la presidencia es el partido, y Morena la agencia formal de colocación.

El sainete protagonizado en la elección de dirigencia de Morena es una muestra de la nula vida democrática dentro del partido, de la carencia de vida interna y el desapego a los estatutos. Tuvieron que postergar en dos ocasiones la elección, porque no pudieron acordarla, sea por voto directo o por voto de delegados. Tuvo que ser AMLO quien decidiera, como si se tratara de un acto de gobierno, que el método electivo fuera la aplicación de encuestas. Fiel a su mística electorera, el proceso de elección se ha convertido en un mecanismo adelantado para la selección del próximo candidato a la Presidencia, en el supuesto de que AMLO no se vaya a reelegir. En un partido donde dicen tener como mantra la anticorrupción, entre los principales candidatos afloran acusaciones de corrupción, de la misma forma en que el actual dirigente provisional acusa a su antecesora de corrupción.

Morena no es un partido político ni un movimiento social, como suele autodesignarse. Es un aparato electoral formado con el único propósito de llevar a AMLO a la presidencia de la República y a su vez agencia de colocación para una miriada de políticos de toda laya. Pero una vez alcanzado el triunfo, se convierte en un partido operado por la Presidencia, donde se deciden candidaturas y cargos, sin mediación del partido. Morena no tiene militancia, no hay un padrón confiable, y sus miembros formales no tienen vida activa, salvo en épocas electorales, cuando se reactiva, porque abundan los interesados en ocupar posiciones políticas y ser funcionarios de gobierno. Es sintomático que para la elección de la dirigencia nacional se hayan registrado 103 candidatos: 49 para la presidencia y 54 para la secretaría general.¹⁵

¹⁴ Erika Hernández, «Padece Morena caos en estados», *Reforma*, 11 de octubre de 2020, en https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?_rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/padece-more-na-caos-en-estados/ar2048040?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--

¹⁵ Ariadna García, «Buscan 103 llegar a la cúpula de Morena», *El Universal*, 9 de septiembre de 2020, en <https://www.eluniversal.com.mx/nacion/buscan-103-llegar-cupula-de-morena>

Morena no tiene ideología, programa, estructura, militancia. No debate, no propone. La guía política es el devocionario del presidente. La nomenclatura está formada por políticos eclécticos permanentemente confrontados, sólo nucleados por su admiración o sumisión a AMLO, a quien no se atreven a contrariar, sólo acatan las ordenes del mando supremo. No es de izquierda ni de derecha, es un aparato electoral, pragmático, utilitarista. Es un cascarón eventualmente desechable por el líder, porque dispone de otros partidos (PT, PES, PV, y los aprobados por el TEPJF para nutrir la alianza: RSP, FxM y PES), para colocar candidaturas, aprobar iniciativas y, si fuera necesario, mudarse una vez más. En un caso extremo, AMLO podrá abandonar a Morena y dejarlo en los huesos, como hiciera con el PRD.

Regeneración del sistema de poder

Bloque de poder: entre el imperio, el caudillo y la mafia

La forma en que se articula el *nuevo bloque de poder* de la 4T evidencia cuáles son sus objetivos estratégicos y las relaciones de dominación y subordinación correspondientes. Destaca el hecho de que lo «nuevo» de este bloque tiene en realidad más componentes de lo «viejo», es decir, el recambio de la clase política dirigente y la burocracia política se alimenta de personajes que han estado activos en los sexenios precedentes en los distintos órdenes de gobierno y en los escaños parlamentarios, en tanto que los empresarios consentidos se sacuden, pero al final de cuentas logran acomodarse en las filas concesionarios, aun cuando haya depuración o purgas de políticos, burócratas y empresarios, algunos de los cuales pasan a la marginalidad y otros a integrar el bloque opositor emergente.

En primer lugar, se continúan acatando las directrices de Estados Unidos, el gran imperio capitalista, que sigue sobredeterminando las principales decisiones económico-políticas en el país y en el resto del continente, sobre todo de corte geopolítico, en materia de inversión, seguridad y

governabilidad. Muy lejos de los discursos antiimperialistas de sus homólogos latinoamericanos (Chávez, Morales, Correa, Kirchner) y de sus intenciones emancipadoras o al menos nacional-progresistas, AMLO asume una actitud complaciente, entregada, con el discollo presidente Donald Trump, quien a su vez usa a México y a los mexicanos como su paño, un recurso ideológico para azuzar a sus seguidores con consignas xenófobas y neofascistas. En una actitud de servidumbre política, que se deslinda de las añejas luchas izquierdistas opositoras al TLCAN, se firma el T-MEC, la prolongación del primer tratado, la columna vertebral del neoliberalismo priista, y ahora acondicionado a los reclamos de Trump, el cual ha servido como plataforma de exportación a las empresas estadounidenses, asiáticas y europeas, y en menor medida mexicanas, para abastecer el mercado estadounidense, donde México cumple el papel de reserva de trabajo barato, de abasto de recursos naturales desregulados y oasis empresarial con bajos impuestos. Al amparo de ese esquema operativo, se transfiere valor, se desmantela la industria nacional, se desarticula el mercado interno y se convierte al país en patio de operaciones de la industria estadounidense. Por si no bastara, el gobierno mexicano cumple a cabalidad las exigencias geopolíticas de su vecino del norte, como la contención de migrantes centroamericanos mediante el uso de la Guardia Nacional, que para efectos prácticos funciona como la nueva policía militar en funciones civiles. A su vez, las operaciones militares encubiertas del gobierno estadounidense se amplifican, derivado de los múltiples acuerdos con las Fuerzas Armadas. Razón por la cual, agencias como la DEA opera libremente por territorio mexicano.

En segundo lugar, se renuevan los acuerdos con la burguesía multinacional para abrir espacios de inversión especulativa y rentable a favor de los grandes fondos de inversión (como BlackRock), los grandes bancos privados globales (p. ej., Santander), los organismos internacionales y las grandes corporaciones empresariales (Facebook, Nestlé, etcétera). La consigna neoliberal siempre ha sido abrirse a la inversión extranjera, especulativa, extractivista, maquiladora, sin importar las consecuencias devastadoras sobre los trabajadores sujetos a la superexplotación y precarización, y sobre los bienes naturales expuestos al despojo, contaminación y depredación. El cometido claramente expuesto por el jefe de gabinete, el empresario de ultraderecha, Alfonso Romo, es convertir a México «en un paraíso para la inversión privada», lo cual no difiere en nada de las proclamas neoliberales de los gobiernos anteriores.

En tercer lugar, se pacta con la burguesía nacional y los emisarios de las multinacionales para establecer los principales acuerdos de inversión encarnados en los proyectos insignia de la 4T en materia de infraestructura y comunicaciones (Tren Maya, refinería de Dos Bocas, aeropuerto militar de Santa Lucía y otros proyectos de infraestructura)

para concesionarlos a una fracción de los capitalistas rentistas que han medrado del Estado mexicano y que han acompañado al nuevo gobierno, y en otro espacio de negociación se trata con grupos empresariales no afines a la 4T, pero que están interesados en invertir e incidir en las políticas públicas y en los proyectos legislativos, como el Consejo Coordinador Empresarial (artífice del proyecto de reforma del sistema de pensiones y proponente de una cartera de proyectos de inversión). La tónica de la 4T no apunta hacia grandes cambios en las relaciones de poder capitalistas. No pretende abolir la propiedad privada de los medios de producción ni expropiar a los expropiadores, como supondría un cambio social; ni siquiera se atreve a cobrar impuestos progresivos al gran capital, como propondría el reformismo socialdemócrata; simplemente busca doblegar políticamente a los empresarios e insertarlos en el nuevo bloque de poder en ciernes.

Base social de apoyo: procreación del nuevo paternalismo

Como complemento necesario al bloque de poder se conforma la *nueva base social de apoyo*, integrada por los sectores que han venido apoyando a la izquierda electoral desde tiempos de Cuauhtémoc Cárdenas, más los aliados políticos que se han sumado en las tres incursiones electorales del lopezobradorismo, más los nuevos adeptos que se integran como beneficiarios de los programas asistencialistas del Gobierno de la 4T. El factor de cohesión para integrar las bases sociales de apoyo del gobierno no es del todo novedoso, ya que reproduce las prácticas neoliberales, de la que en su momento fuera llamada «nueva política social», que consiste en otorgar dádivas — sean transferencias monetarias o en especie — a los sectores pobres de la población, a lo cual se adicionan nuevos componentes ideológicos, emanados del populismo, para configurar un «pueblo bueno y sabio», a la sazón el amplio sector de apoyo al presidencialismo renacido. Entonces significa un nuevo paternalismo, que ya no sigue las pautas del corporativismo estatista que inaugurara el cardenismo, con sectores organizados (laboral, campesino y popular), sino

que ahora se elude la intermediación política, con objeto de establecer un trato sin mediaciones, directo, entre el Ejecutivo y los sectores que asumen la figura espectral de «pueblo», mediante el otorgamiento de recursos dinerarios a adultos mayores, discapacitados, aprendices, estudiantes, etcétera. La dispersión monetaria se adereza con discursos diarios dirigidos a los beneficiarios y simpatizantes del gobierno a fin de avalar los programas gubernamentales y de divulgar el pensamiento sui géneris del presidente con arengas machaconas, basadas en frases hechas, pronunciadas lentamente, a la manera de un sermón que busca mantener el apego de la feligresía, el pueblo imaginario, que para efectos prácticos es un mero espectador, que ensalza al presidente, visto como una especie de caudillo o mesías.

Con depurar la corrupción individual, adoptar un credo evangélico y asumir un comportamiento honesto, los problemas se resuelven por añadidura.



La nueva política social o el nuevo paternalismo prohija una amplia base social de apoyo mediante la entrega de dinero a sectores focalizados identificados como pobres y bases de apoyo electoral y también posibilita la legitimación del régimen y de los actos de gobierno, donde se aprueban los proyectos gubernamentales mediante consultas públicas, que a pesar de que han sido muy deficientes en su implementación pretenden establecer la democracia directa como forma de participación social y al gobierno plebiscitario con la consulta sobre la revocación del mandato, que es transfigurada por el gobierno como ratificación del mandato, y la consulta sobre el juicio a expresidentes. Este tipo de prácticas populistas degradan la democracia como gobierno del pueblo, porque en lugar de conjugar virtuosamente la democracia representativa y la democracia participativa utilizan ardidés consultivos que, además de estar mal diseñados, sólo atienden determinados proyectos o temas efectistas, cuya recepción popular ha sido largamente orientada por la propaganda oficial, inclusive se trata de temas que representan proyectos ya decididos y puestos en práctica. Huelga decir que, en el mayor de los casos, las comunidades afectadas no son consideradas en la toma de decisiones. Otro ingrediente es el hecho de que la base social gubernamental sustituye a la militancia de Morena, por lo que ese instituto se torna aún más prescindible e irrelevante, toda vez que en la práctica la conexión entre el presidente y su base prescinde de la mediación política partidaria. El paternalismo estatal también es un campo fértil para construir alianzas con los empresarios que instrumentalizan la bancarización de los pobres, toda vez que la distribución de los recursos dinerarios a sus beneficiarios se hace mediante la banca privada, destacadamente Banco Azteca, del magnate Ricardo Salinas, aliado político del gobierno.

*Oposición: entre la lealtad, la tensión,
la confrontación y la crítica*

La asunción de la 4T entraña el derrocamiento del bloque dominante y su trasvase hacia el nuevo bloque opositor, y este es quizá su principal co-

metido y la mayor expectativa social. Sin embargo, la nueva oposición es un sector amplio, heterogéneo y no unificado. Aunque la estrategia mediática basada en la confrontación de la Presidencia ha sido sobresimplificar o caricaturizar el espectro político en dos bandos antagonicos: los buenos y los malos, los que están con el presidente y los que están en su contra; presentar a los críticos y oponentes de la 4T como si fuesen un bloque monolítico, y más aún, como si fuesen los conservadores, los corruptos. Esta estratagema es un completo despropósito político.

Por obvias razones, en el Gobierno anterior, las bases de apoyo del lopezobradorismo eran el bloque opositor, las cuales ahora se reconvierten en bases de apoyo, en tanto que las bases de apoyo del anterior gobierno se metamorfosean en el bloque opositor. Aunque no se trata de un trasvase total y mecánico entre ambos contingentes contrapuestos. Hay grupos, sectores e individuos que se transmutan ellos mismos con los cambios políticos y pueden seguir siendo apoyadores del nuevo Gobierno, habiéndolo sido del anterior, o pueden seguir siendo opositores del nuevo Gobierno, habiendo sido también opositores del gobierno precedente. Sin embargo, en términos gruesos, puede advertirse una recomposición del bloque opositor frente a la 4T.

Evidentemente, la oposición formal está compuesta por los partidos políticos perdedores, sobre todo los que encabezaron los anteriores gobiernos. Los partidos opositores a AMLO son claramente el PAN, PRD y Convergencia, que apoyaron la candidatura del panista Ricardo Anaya, en tanto que el PRI y el PVEM apoyaron a José Antonio Meade. No obstante, el comportamiento político del PRI y del PVEM ha sido desconcertante, porque han cumplido un papel ambiguo, entre oposición y apoyo a AMLO, o una oposición leal, condescendiente, sumisa. Máxime el PVEM, que siempre se vende al mejor postor y apoya a los gobiernos en turno, y en este caso no es la excepción, sin tapujos se sumó a Morena y al presidente.

Los gobernadores del PAN, Convergencia y el independiente, han desempeñado un papel de oposición, no así los del PRI, PVEM y, obviamente, Morena. Los primeros, que gobiernan 12 estados, han integrado la llamada Alianza Federalista y la Alianza Centro Bajío Occidente: Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas. Estos gobernadores han cuestionado la política sanitaria en el contexto de la pandemia, pero también la política fiscal y la política económica de la federación.¹⁶ El desencuentro entre la Presidencia y los gobernadores, desencadenó la salida de los gobernadores de la Alianza de la Conferencia Nacional de Gobernadores

¹⁶ Roberto Aguilar, «Gobernadores de 12 estados impulsan un nuevo federalismo», *El Universal*, 3 de julio de 2020, en <https://www.eluniversal.com.mx/estados/gobernadores-de-12-estados-impulsan-un-nuevo-federalismo>

(Conago) y desembocó en la crisis por el agua en la presa la Boquilla, en Chihuahua, que derivó en la expulsión de la Guardia Nacional por los agricultores y en el asesinato de una manifestante por ese organismo policial militarizado. Las tensiones entre gobernadores y Presidencia tienen como trasfondo los preparativos para las elecciones federales intermedias de 2021.

Una fracción de la burguesía nacional, que antes era del bloque de poder, pasa a formar parte de la nueva oposición. Son sectores de la burguesía nacional que están en confrontación abierta con la 4T y que tienen afiliación o simpatía con el PAN (Claudio X. González, Coparmex, Femsas), e impulsan diversas intenciones políticas opositoras (Sí por México), pero también los hay que no tienen una afinidad partidista sino más bien tintes ultraderechistas con ligas clericales y fascistas como el Frente Nacional Anti-AMLO (Frenaaa). Diversas organizaciones de derecha y de la sociedad civil, como el Frenaaa y Congreso Nacional Ciudadano han organizado marchas y manifestaciones en contra de AMLO. En el colmo, hasta el propio AMLO creó una organización de ficción en su contra: el Bloque Opositor Amplio (BOA).

Como parte de sus embates, la 4T abre un frente de ataque contra industriales que han apoyado abiertamente al PAN (Bimbo, Lala) bajo el pretexto de defender la salud de los consumidores con el etiquetado de productos, y la prohibición de la venta de derivados lácteos; pero estas disposiciones no forman parte de un programa integral de producción de alimentos, nutrición y salud pública. Asimismo, se emprende una campaña contra determinados medios de comunicación privados que funguen como oposición (*Reforma, El Universal*), pero no contra los que se alinean (Televisa, TV Azteca), que pueden ser iguales o más tóxicos, comunicacional y culturalmente hablando. Se puede inferir que la 4T, así como crea sus bases de apoyo, también configura o incide en la formación de su específica oposición.

En un renglón aparte se colocan los grupos del crimen organizado, que no tienen proyecto político, sólo intereses económicos, pero le disputan al Estado el control del territorio donde producen, almacenan, distribuyen y comercializan drogas o cometen otros delitos.¹⁷ Sin embargo, mientras la espiral de violencia aumenta, persiste la compenetración del crimen organizado con los aparatos del Estado, desde las Fuerzas Armadas y policiales, hasta instancias de impartición de justicia y esferas diversas del gobierno.

¹⁷ Humberto Márquez Covarrubias, «El capital es el crimen organizado: violencia, mercancía ilícita y dinero negro», en Sigifredo Esquivel, Leocadio Martínez y Jezabel Hernández (coords.), *Textos y contextos psicosociales. Violencia, pobreza, género*, Querétaro, Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro, 2020.

La otra oposición

Al contrario de lo que proclama AMLO, hay opositores y críticos que no son ni de derecha ni conservadores. Por una parte, están los afectados por las decisiones de la 4T o las víctimas de las Fuerzas Armadas, la policía y la criminalidad, y, por otra parte, están los movimientos sociales, organizaciones políticas y sindicatos. Entre ellos, se encuentran los afectados por las decisiones de la 4T: empleados públicos despedidos por el gobierno, becarios, académicos e investigadores; organizaciones sociales, movimientos sociales y afectados por los megaproyectos. Muchos de ellos fueron votantes de AMLO, que esperaban un «cambio», pero fueron decepcionados. Pero también hay movimientos de trabajadores veteranos y emergentes, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Michoacán, los obreros de las maquiladoras en Matamoros y los universitarios a nivel nacional.

Por más de seis semanas los maestros de la sección 18 de la CNTE bloquearon las vías del tren en Lázaro Cárdenas, Michoacán, para exigir el pago de salarios y adeudos atrasados, según los industriales, el bloqueo del tráfico de combustible y materia prima en los vagones arrojó pérdidas por mil 950 millones de pesos.

Los trabajadores de las maquiladoras obligaron a sus líderes cetemistas a parar y estallaron una huelga en 48 plantas con alrededor de 45 mil trabajadores en Matamoros, Tamaulipas, quienes exigían un bono de 32 mil pesos y un incremento salarial de 20 por ciento, en correspondencia al aumento del salario mínimo decretado en la frontera norte.

Los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) estallaron una huelga, luego de que fueran despedidos al menos 241 empleados, lo que habría derivado en 85 juicios laborales por violaciones al contrato colectivo y la negación de la directora a negociar con los sindicalizados.

Al menos 25 universidades públicas autónomas y 45 sindicatos universitarios realizaron un paro de labores por falta de presupuesto, donde al menos

nueve universidades no tienen recursos para pagar el salario de sus trabajadores.

Mujeres y grupos de feministas realizaron un paro nacional y marchas en varias ciudades del país para protestar contra los feminicidios y exigieron al gobierno que actúe para detener la ola de feminicidios, que ronda un promedio de 10 mujeres asesinadas cada día. En 2019, se registraron mil 6 asesinatos de mujeres y niñas por causas de género, según las cifras oficiales, 10 por ciento más que el año anterior.

Javier Sicilia y Julián Lebaron realizaron la Marcha por la Paz, una prolongación de las manifestaciones de años anteriores, que reivindican a las víctimas de la violencia del Estado o del crimen organizado.

En diversos momentos, organizaciones campesinas y del sector rural, de diverso signo político y afiliación partidaria, como la Unión de Trabajadores Agrícolas (Unta), la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, el Frente Auténtico del Campo «El Campo es de Todos», la Unión General Obrera, Campesina y Popular (UGOCP), la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), entre otros, han protestado por la disminución del presupuesto al agro. También se han manifestado diversos grupos de afectados por los recortes gubernamentales a sectores de salud que afectan el suministro de medicamentos y la provisión de insumos médicos, o los servicios de guarderías infantiles o el impago de salarios magisteriales, entre otros.

Los megaproyectos han sido escenario de protestas por grupos de afectados que defienden su territorio y se oponen, por ejemplo, a la construcción del Tren Maya, las hidroeléctricas y la megaminería. Proliferan además las protestas de los trabajadores de la ciencia y la cultura: los académicos por recortes en presupuestos de universidades públicas y centros de investigación; los investigadores y becarios por recortes en Conacyt; los trabajadores de la cultura por recortes en el sector. En otro orden de disputa, los medios de comunicación señalados cotidianamente como adversarios conservadores rediseñan sus políticas editoriales y difunden información crítica sobre el ejercicio gubernamental. Lo anterior sin contar la marabunta

de dimes y diretes en las redes sociales, los medios de comunicación y las charlas de café, donde la figura presidencial es la comidilla.

El hecho es que AMLO denuesta a la crítica y no recibe a los sindicatos, organizaciones, movimientos y grupos sociales que reivindican derechos, sectores que fueron su soporte electoral pero que ahora dice no tener tiempo para recibirlos, y no ceder a «chantajes», por lo que recomiendo que no pierdan su tiempo. Los sectores que reivindican sus derechos no son reconocidos como parte del «pueblo bueno y sabio» sino que se hacen merecedores de epítetos como «conservadores» o «neoliberales». Esto según el patrón de que «quienes no están conmigo, están contra mí».

Disputa por el discurso hegemónico

En el juego de contradicciones, el dilema es establecer cuál es el problema principal y desde esa plataforma dirimir todos los conflictos, políticas y acciones. Tener claridad sobre cuál es el problema central o el nudo de problemas significa un asunto crucial para un proyecto de transformación social, pero para la 4T esto no es un desafío científico o histórico, sino un problema político coyuntural para asentar su hegemonía ideológica, porque ahí se fija la contradicción central y se supedita al conjunto de la sociedad civil y del Estado. Para el populismo en general, y AMLO no podría ser la excepción, el principal problema es la corrupción de un grupo específico de poder, pero no la corrupción del capitalismo, sino sólo la de los políticos, pero no de todos los políticos, sólo la de sus adversarios. Y la política de «transformación» se reduce a una lucha contra la corrupción, donde se supone que al abatir este «mal» se depurará el sistema y todos los demás problemas se solucionarán.

El discurso lopezobradorista incurre en la sobresimplificación. Según el discurso machacón, monocromático y reduccionista de la 4T todos los males y problemas se reducen a una palabra: corrupción como sinónimo de neoliberalismo. Con ello se encubren los problemas estructurales que articulan las relaciones sociales de explotación, despojo, dominación, opresión, precarización.

Pese a que se apoya en la noción de «transformación», el discurso de AMLO es de talante conservador, en varios planos y niveles. No sólo no enarbola las causas del cambio económico-político que están en la raíz de los problemas estructurales, sino que ni siquiera se atreve a reivindicar las causas sociales de grupos identitarios o culturales, como los derechos reproductivos de la mujer, que se centran en el aborto, o de las feministas, en contra de la violencia de género. Con esos temas no puede lidiar, porque, evidentemente, su postura es antiaborto y evangélica. Decir que ahora «se defiende y protege a las mujeres como en ningún otro gobierno» es simplemente una frase demagógica que no tiene sustento real. No pronunciarse a favor de la legalización de la marihuana también niega los llamados

de la sociedad para dejar de criminalizar su producción y consumo y eliminar la carga de violencia y muerte que la circunda. No expresarse sobre los matrimonios «igualitarios» también desconoce las reivindicaciones de grupos homosexuales. Es decir, la agenda de la izquierda cultural no es asumida por el presidente y este hecho singular lo muestra como un personaje tradicionalista y conservador, apegados a los valores cristianos, la familia y las buenas costumbres. En ese tenor, pareciera que la derecha y la Iglesia nunca han perdido el poder en México.

En la lucha política invoca a los fantasmas del pasado, liberales y conservadores, como si esas figuras fueran vigentes en la realidad actual, donde él es el jefe del partido liberal (una reencarnación de Benito Juárez) y todos los opositores, críticos, disidentes y escépticos en bloque fueran el partido conservador. Este maniqueísmo político es útil para el propósito de crear un enemigo imaginario, luchar todos los días contra él, cual si enfrentara molinos de viento quijotescos y salir airoso en cada jornada habiendo derrotado al contrincante. El problema es que no hay conciencia de enemigo histórico, no se han afinado correctamente las coordenadas políticas de la realidad social y no se ha hecho un mapeo de agentes y una estimación de la correlación de fuerzas donde estén encarnadas las clases sociales y sus formas de representación. En ese imaginario no aparece el imperialismo (Trump es su amigo, aliado o socio), no aparece el capital (sólo los empresarios buenos, del bando liberal y los empresarios malos, del conservador), no aparecen los trabajadores (sólo el pueblo bueno y sabio), no aparecen los intelectuales (sólo los privilegiados del círculo íntimo).

La elusión de los problemas históricos, estructurales y estratégicos en aras del cambio social sólo permite esgrimir una agenda mínima de izquierda reformista, en este caso populista y neoliberal. No apoya las luchas ambientalistas, ni las demandas de grupos indígenas, ni las exigencias de los campesinos ni las causas de los trabajadores.

La ruta del transformismo

Para descifrar el cometido y derrotero del proyecto de transformación que encarna la 4T, hay que considerar lo que se quiere desmantelar, lo que se quiere continuar y lo que se quiere crear. Es decir, en la lógica de transformación habría que distinguir aquello que en términos políticos e institucionales se quiere destruir, lo que se quiere preservar y lo que se quiere crear como forma nueva.

Destrucción

Un proyecto de transformación social comienza con su lado negativo para acometer aquello que se quiere negar, disolver, derogar

o superar. Pero la 4T no plantea un cambio social sino un proyecto de gobierno de alternancia y una reconcentración del poder. Entre lo que se quiere desmantelar se encuentra claramente el bloque de poder comandado por la alianza entre el PRI y el PAN (el PRIAN) y sus socios: PRD, PVEM, que en conjunto forman la coalición neoliberal o el partido del orden y el dinero. Esto daría al traste con el grupo político hegemónico que se formó alrededor de la figura política y tecnocrática de Carlos Salinas y sus seguidores. No obstante, en el lopezobradorismo persisten al menos dos venas políticas de ese neoliberalismo negado: el salinismo que está representado por el fallecido Manuel Camacho, precandidato presidencial priista y perredista a la última hora, cuyo influjo se transmite a través de su discípulo Marcelo Ebrard (quien ya sucedió a AMLO en el gobierno de la Ciudad de México y se perfila para hacerlo en la presidencia de la República); Manuel Bartlett, operador político del salinismo y del viejo priismo autoritario (artífice de la «caída del sistema» por el cual se cometería fraude electoral a favor de Salinas y en contra de Cárdenas); además se incluye a políticos del zedillismo neoliberal priista como Olga Sánchez Cordero y Esteban Moctezuma. Como ellos, una gran cantidad de priistas y panistas neoliberales se insertan en las filas de Morena y ocupan posiciones de gobierno importantes. Desde esa perspectiva, más que una destrucción del antiguo régimen, se ensaya una depuración y un intento de regeneración del presidencialismo priista. Sin mencionar a la tecnocracia hacendaria, piedra angular del manejo macroeconómico, y el papel de secretarías de Estado, como Economía, en tanto operadora del T-MEC y, en especial, la vena empresarial de Alfonso Romo y sus allegados.

Continuidad

Aún bajo los aires del cambio, diversas instituciones requieren cierta dosis de continuidad para apuntalar un proceso de transición, como preparativo para la creación de una nueva sociedad. No obstante, cuando el cambio proyectado es acotado, con objeto de instalar un nuevo grupo de poder,

la continuidad funge como eje inamovible de la trama de acumulación y del poder que la sustenta. Entre lo que se quiere preservar está a buen resguardo el núcleo duro del modelo económico neoliberal: el T-MEC, la austeridad, el monetarismo, la inversión privada, el despojo territorial y el control de los trabajadores, y en el plano político: la política de seguridad de Estados Unidos en suelo mexicano, la militarización, las reformas neoliberales (salvo la educativa, que fue reformada en términos semejantes).

La continuidad del patrón de acumulación capitalista subordinado tiene al T-MEC como su punta de lanza, para que México siga siendo el eslabón débil de las cadenas productivas. El T-MEC, la versión actualizada y reforzada del TLCAN, es el marco normativo de la plataforma de exportación del capital industrial multinacional a partir de maquiladoras, agronegocios, vías férreas, recursos naturales desregulados y fuerza de trabajo barata, que coloca a México en el patio trasero de la economía norteamericana. Su aprobación se realizó sin consulta, se impuso a los trabajadores y la población en general, y la negociación fue entre los gobiernos y asesores empresariales para imponer los criterios del capital corporativo. El Gobierno de la 4T hace tabla rasa del desastre económico, social y ambiental, la desindustrialización y descampesinización, la desvalorización salarial y la migración masiva, además de la incubación de la economía criminal y de los efectos nocivos del TLCAN por 25 años y no obstante se suma entusiasta a la segunda versión, instrumentada en lo sustancial por el gobierno de Donald Trump. El refrendo del tratado afianza el mecanismo más poderoso del llamado neoliberalismo, al que dicen combatir.

En aras de la concentración del poder presidencial, no se ha creado una nueva institucionalidad, sólo se ha desmantelado las instancias de mediación, programas y presupuestos. Se han renombrado varias dependencias, como la Secretaría de Desarrollo Social, eje del asistencialismo neoliberal, ahora conocida como Secretaría del Bienestar, para cumplir los mismos propósitos: crear una base de apoyo social mediante transferencias monetarias hacia grupos focalizados de la población (*u. gr.*,

«el pueblo bueno»), por lo que en vez de crear derechos sociales universales se prohíjan votantes dependientes; el Seguro Popular pasa a ser Instituto de Salud para el Bienestar; el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes se renombra como Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado; el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros se cambia a Banco del Bienestar; el Centro de Investigación y Seguridad Nacional es ahora el Centro Nacional de Inteligencia. Se trata de cambios de forma y no de fondo, con el atenuante de la severa austeridad neoliberal, que lastra las capacidades institucionales.

Creación

El sello distintivo de un proyecto de transformación no lo aporta lo que se destruye ni lo que se preserva, sino lo que se pretende crear. Si la carga de innovación del proyecto es limitada, raquíutica, entonces realmente no se quiere transformar la sociedad, sino mantener inalterables sus fundamentos y, en todo caso, se busca en realidad abrir nichos para asentar una nueva dirigencia política, que dé respuesta a la crisis política y restaure la legitimidad del sistema.

En la 4T no hay claridad sobre el contenido concreto de lo nuevo. Lo principal es conformar un nuevo bloque de poder y su correspondiente base social de apoyo, que garantice el proyecto transexenal. Sólo hay proyectos insignia de infraestructura focalizada en el sur-sureste y la Ciudad de México y programas asistenciales con grandes montos, en detrimento de la inversión ampliada en el capital social fijo, en los medios colectivos de consumo y en la formación de nuevas capacidades productivas acordes a los desafíos científicos, tecnológicos y laborales del tercer decenio del siglo XXI. Las reformas legales y constitucionales emprendidas y programadas siguen la tradición de los gobiernos en turno, los nacionalistas y los neoliberales, para enmendar partes que abonen al programa de gobierno, pero sin orientar un proyecto constitucional integral, de largo plazo y de contenido social transformador. Los cambios en la Constitución y las leyes reglamentarias apuntan a reformas contingentes que refuerzan el presidencialismo en materia de seguridad, Fuerzas Armadas, además de ajustes punitivos en el Código Penal y otras ordenanzas.

A diferencia de los gobiernos progresistas de Sudamérica, que formularon una nueva constitución, la 4T no se atreve a hacerlo, sólo ha realizado cambios constitucionales que reforman, parchan, arreglan, distintos artículos, como ha sido la práctica de los gobiernos precedentes. De hecho, la Constitución de 1917 ha sufrido 741 reformas a 136 artículos, y se ha tornado en una carta incongruente, acomodaticia, vejada. La 4T puede presumir de cambios constitucionales sin cambiar la constitución: 14 reformas constitucionales, 15 nuevas leyes y 111 nuevos ordenamientos, entre los que destacan las reformas

legislativas que refuerzan el presidencialismo y los controles fiscales y judiciales en materia de extinción de dominio (uso de bienes patrimoniales ilegales o delictivos); prisión preventiva oficiosa junto a la ampliación del catálogo de delitos graves; creación de la Guardia Nacional acompañada de leyes nacionales para el uso de la fuerza, detenciones y seguridad pública; reforma de la reforma educativa que suple el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; y el Sistema Nacional de Evaluación Educativa y crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación; prohibición de condonación de impuestos; remuneración a servidores públicos; acotamiento del fuero al presidente y legisladores; y revocación de mandato y consulta popular. A instancias del gobierno de Estados Unidos, en el marco de negociaciones del T-MEC, se hizo una reforma laboral y se incrementaron los salarios mínimos, sobre todo en la franja fronteriza, donde están la mayoría de las maquiladoras.

Los cambios más importantes refuerzan el ámbito de acción de las Fuerzas Armadas, y en cambio, no se revierten las reformas estructurales del Pacto por México, que había sido el marco legal y político contra el cual se alzó la 4T (educativa, telecomunicaciones, libertad de conciencia y de religión, energética, laboral, minera, etcétera) y las anteriores de los demás gobiernos neoliberales. Es decir, la 4T gobierna sobre la plataforma del malhadado «Pacto por México» y sobre la plataforma económico-política heredada del neoliberalismo de los últimos tiempos.

Parafraseando a Marx:¹⁸ la transformación social sólo puede extraer su poesía del futuro y no del pasado, pero esa transformación no será obra del Estado sino de las clases trabajadoras organizadas, pero eso es lo que la 4T no quiere. 🐦

¹⁸ Karl Marx, *El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte*, México, Grijalbo, 1988.